COMISION DE REFORMA CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE TUCUMAN.-

Tema: CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PAMPA: LEY N° 1.828 Y CONCORDANTES.-

Grupo nº 2: Integrantes

- Ana María Antún de Nanni
- Adriana Berni
- Luis Cossio
- Agustín Repetto
- Marcela Cabrera
- Silvana Gandino
- Santiago J. Peral
- Marcelo Billone
- Juan Antonio Abraham Musi
- Juan Emilio Musi
- Augusto Cerezo Bazzi

Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa: Ley n° 1.828 y concordantes.-

I.- Estructura General y Principios Generales:

Principio dispositivo: brevísima exposición y su morigeración o atenuación en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Pampa.

Llamase principio dispositivo aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes, tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez. La irrestricta vigencia de este principio (por cierto atenuada y por qué no decir flexibilizada en el código pampeano) se exterioriza en los siguientes aspectos: iniciativa, disponibilidad del derecho material, impulso procesal, delimitación del *thema decidendum*, aportación de los hechos y aportación de la prueba.

A) Iniciativa.

El proceso civil sólo puede iniciarse a instancia de parte (*nemo iudex sine actore; ne procedat iudex ex officio*).

B) Disponibilidad del derecho material.

Una vez iniciado el proceso, el órgano judicial se halla vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes relativas a la suerte de aquél o tendientes a la modificación o extinción de la relación de derecho material en la cual se fundó la pretensión.

Es preciso señalar, sin embargo, que cierta clase de relaciones jurídicas, en las cuales existe un interés social comprometido, impone la necesidad de que respecto de los procesos en que ellas se controvierten, prevalezcan los poderes del juez sobre las facultades dispositivas de las partes. Tal es lo que sucede con los procesos relativos al estado civil y a la capacidad de las personas (vbg. procesos matrimoniales, entre otros), en los cuales no cabe el allanamiento, la transacción o la sumisión al juicio de árbitros o de amigables componedores.

C) Impulso procesal.

Consiste en la actividad que es menester cumplir para que, una vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquel pueda superar los distintos períodos de que se compone y que lo conducen hasta la decisión final.

La doctrina suele referirse a los principios de impulso de parte y de impulso oficial, según que, respectivamente, la actividad proceda de las partes o del tribunal, aunque sin dejar de reconocer la estrecha vinculación que el primero guarda con el principio dispositivo. A nuestro juicio, el principio de impulso de parte es una consecuencia del mencionado principio dispositivo.

D) Delimitación del *thema decidendum*.

El principio dispositivo impone que sean las partes, exclusivamente, quienes determinen el *thema decidendum*, debiendo el juez, por lo tanto, limitar su pronunciamiento a lo que ha sido pedido por aquellas en los actos de constitución del proceso. Así lo establece el art. 163, inc. 3, del código procesal nacional al disponer que la sentencia definitiva deberá contener "la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte".

E) Aportación de los hechos.

Como consecuencia del principio dispositivo, la aportación de los hechos en que las partes fundan sus pretensiones y defensas constituye una actividad que les es privativa, estando vedada al juez la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes. Igualmente le está vedado el esclarecimiento de la verdad de los hechos afirmados por una de las partes y expresamente admitidos por la contraria (afirmación bilateral). No ocurre lo mismo, en cambio, con la determinación de las normas jurídicas aplicables al caso, pues en lo que a ello se refiere, debe atenderse a su conocimiento del orden jurídico vigente, con prescindencia de las invocaciones legales que hubiera formulado las partes (*iura novit curia*).

F) **Aportación de la prueba.** No obstante que la estricta vigencia del principio dispositivo exigiría que la posibilidad de aportar la prueba necesaria para acreditar los hechos controvertidos se confiase exclusivamente a las partes, aun las leyes procesales más firmemente adheridas a ese principio admiten, en forma concurrente con dicha carga, aunque subordinada a ella, la facultad de los jueces para complementar o integrar, ex officio, el material probatorio del proceso.

Tras esta **elementalísima** reseña, tomada claro está, de la doctrina tradicional, entraremos de lleno en el articulado del código pampeano.

- a) Advertimos que el Juez inicia un proceso de abandono de su tradicional rol de juez espectador para asumir uno marcadamente proactivo y conciliador, toda vez que, bajo pena de nulidad debe presidir personalmente las audiencias orales.
- b) Se prevé que sea en Secretario, en su caso el Prosecretario quienes puedan firmar providencias de mero trámite.
- c) Aunque el código pampeano no lo prevea, dentro de esta cuestión merece nuestro elogio lo dispuesto en el art. 56 *in fine* del código de Río Negro en cuanto prevé que el letrado patrocinante puede pedir se dicten providencias de mero trámite.
- d) Se propende hacia la búsqueda de la autocomposición del conflicto.
- e) Se establece que se fijan, o si se quiere se determinan los puntos de debate, pudiéndose disponer prueba de oficio.
- f) Se pueden disponer medidas para mejor proveer.
- g) Puede el Juez impulsar de oficio.
- h) Se elimina el proceso sumario.
- i) Se prevé el proceso monitorio, la tutela anticipada y las medidas autosatisfactivas.

Establece particulares novedades en materia regulatoria de la apelación:

- a) Fundamentación del recurso libremente concedido en primera instancia.
- b) Consagra el denominado efecto diferido.
- c) En cuanto a los efectos, enumera taxativamente los casos en los cuales debe concederse la apelación con el denominado suspensivo, en tanto que en los restantes casos estatuye que debe serlo en el devolutivo. Por nuestra parte, consideramos peligroso el texto del inc. 6º del art. 238 que casi consagra un juez legislador.

En lo concerniente a la carga de la prueba consagra en su art. 360 *in fine* las denominadas cargas probatorias dinámicas.

Por otro lado, unifica los plazos de caducidad, tanto los de primera, como los de segunda instancia. Esto debe interpretarse armónicamente con la impulsión de oficio permitida en este código.

Por último prevé el juicio arbitral.

En cuanto a los distintos procesos regulados por el Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa (en adelante CPCCLP), se prevén:

Proceso sumarísimo: CPCCLP establece que serán aplicables para a) Amparos, B) interdictos y acciones posesorias y C) demás casos previstos por las leyes.

Proceso monitorio: presentación de instrumento público o privado, o cuya firma estuviere certificada por escribano público. Presentada la documentación el juez examinará el título y en caso afirmativo, dictará sentencia monitoria. La parte afectada podrá oponerse a la misma, presentarán pruebas y continuará el trámite por proceso ordinario.

Proceso de Ejecución:

A) Ejecución de sentencia: 1. Sentencias consentidas o ejecutoriadas 2. Ejecución de transacciones o acuerdos homologados y 2- cobros de honorarios regulados judicialmente.

B) Juicio ejecutivo: Por obligaciones exigibles liquidas o fácilmente liquidables.-

C) Sentencias monitorias. Embargos y excepciones:

- 1- Se libra mandamiento.
- 2- Se requerirá el pago al deudor.
- 3- Se pueden trabar embargos.

Son irrecurribles: sentencias monitorias, intimación de pago y citación para la defensa

- 4- Apertura a prueba
- 5- Vencido plazo a prueba, alegatos por 5 días
- 6- Sentencia

Queda habilitado el juicio ordinario posterior.

D) Ejecución hipotecaria.

E) Ejecución prendaria.

F) Ejecución comercial: Transporte marítimo terrestre o aéreo.

Procesos especiales:

G) Interdictos:

- 1- para adquirir posesión o tenencia.
- 2- para retener posesión o tenencia.
- 3- para recobrar posesión o tenencia.
- 4- para impedir una obra nueva.

H) Acciones posesorias.

I) Declaración de demencia.

J) Declaración de sordomudez.

K) Declaración de inhabilitación.

L) Pródigo.

M) Alimentos y litis pendencia.

N) Mensura y deslinde.

O) Desalojo

II.- Procesos de Conocimiento: Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa Libro II (Arts. 301 a 462).-

Introducción:

En este apartado efectuaremos un análisis de las normas procesales del

CPCCLP que regulan los procesos de conocimiento, haciendo hincapié en aquellas disposiciones normativas que regulan institutos procesales novedosos, cuya incorporación podría ser aconsejable en el código procesal de la provincia de Tucumán.

El análisis propuesto será llevado a cabo con la intención resaltar cuáles son los principios procesales y las corrientes doctrinarias que el legislador pampeano optó por seguir y plasmar en sus normas procesales.

Medidas Autosatisfactivas (Art. 305).-

Art. 305.- MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS.- Quien se encuentre en la situación prevista por los artículos 302 de este Código y 1º de la Ley 703, la que la modifique o sustituya, y sostenga que la protección de su interés jurídico no requerirá de la ulterior promoción de un proceso de conocimiento, podrá solicitar al juez que adopte las medidas autosatisfactivas que sean necesarias, en caso de que la protección judicial no pueda ser lograda por otra vía legal eficaz.

Para ello deberá explicar con claridad en qué consisten su derecho y su urgencia y aportar todos los elementos probatorios que fundamenten la petición.

El Juez se pronunciará con la urgencia que el caso requiera, concediendo o denegando la medida. Cuando sea posible, la sustanciará previa y brevemente con quien corresponda.

Al decretar la medida, el juez podrá:

1º) Exigir al peticionante caución real o personal. En este caso, determinará cuál ha de ser su vigencia.

2º) Limitar la vigencia temporal de la medida, sin perjuicio de su ulterior prórroga. Podrá también modificarla, sustituirla o dejarla sin efecto, cuando las circunstancias ulteriores lo justifiquen.

A las medidas autosatisfactivas no les será aplicable el art. 201.

El legitimado para oponerse a la medida, podrá:

a) Pedir su suspensión, en caso de que pueda sufrir un perjuicio de imposible o difícil reparación; para ello deberá ofrecer caución suficiente.

b) Interponer recurso de revocatoria. El mismo deberá ser acompañado de toda la prueba que lo fundamente. El Juez lo resolverá sin más trámite o lo sustanciará en forma breve, cuando exista posibilidad de hacerlo.

c) Interponer recurso de apelación, directo o en subsidio al de revocatoria, que será concedido en efecto devolutivo.

d) promover el proceso de conocimiento que corresponda, cuya iniciación no afectará por sí sola la vigencia de la medida. Interpuesto el recurso de apelación se pierde la posibilidad de iniciar este proceso.

Comentario:

Entre las normas procesales del CPCCLP que consideramos importante analizar se encuentra la del art. 305, en razón de que regula las medidas autosatisfactivas, las cuales no tienen una recepción legislativa en los códigos procesales de nuestra provincia, resultando necesario que en reforma de nuestro CPCCT se analice la posibilidad de incluir una regulación específica sobre las mismas.

En la definición de J. W. Peyrano la medida autosatisfactiva constituye un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota – de allí lo de autosatisfactiva – con su despacho favorable, no siendo entonces necesaria la iniciación de una ulterior acción principal¹. Esta definición ha llevado a muchos autores a una confusión, en el sentido de que la bilateralidad no es necesaria y el proceso ha finalizado².

En igual sentido se ha dicho que la medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar³, que genera un proceso autónomo de todo otro (a diferencia

¹ Peyrano, Jorge W., La medida autosatisfactiva; forma diferenciada de tutela...en “*Medidas autosatisfactivas*”, dir. Por Peyrano, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 13.

² Falcón, Enrique M., *Sistemas cautelares y bilateralidad*, Acad. Nac. de Derecho 2010 (septiembre), 24/01/2011, 5, AR/DOC/7063/2010.

³ Peyrano, Jorge W., “*La medida autosatisfactiva: solución urgente no cautelar*”, en “Nuevas apostillas

de lo que sucede con el proceso cautelar que es sirviente de otro principal) y que puede coronarse por una resolución con valor de cosa juzgada⁴.

Analizado el texto normativo ut supra destacamos algunas cuestiones relevantes: 1) El supuesto de hecho de la norma prevé quienes estarían legitimados para solicitar una medida autosatisfactiva, quedando facultados para ello solo quienes se encuentren comprendidos en las situaciones previstas por los artículos 302° del CPCCLP y 1° de la Ley n° 703 referentes al Amparo del artículo 43° de la Constitución Nacional y al Judicial contra la Autoridad Pública Provincial, respectivamente; 2) como requisito dispone que no exista otra vía legal eficaz y que 3) el actor precise y puntualice algunas cuestiones fácticas que hacen a la procedencia de la medida, como los motivos por los que se peticiona, con precisión de las circunstancias fácticas determinantes de la urgencia; 4) la norma prevé que el Juez valorará la urgencia en el caso concreto y la irreparabilidad que el despacho no otorgado ocasionaría al peticionante si se lo forzara a optar por medios procesales más amplios, por lo que el Juez deberá examinar si la urgencia puede o no estar a un procedimiento anterior amplio de petición, confirmación y alegación; 5) no obstante de que la norma no lo enuncie exactamente interpretamos que otro factor condicionante para su otorgamiento es el: Peligro en la demora (entiéndase en el sentido de infructuosidad o tardanza); 6) el Juez, al decretar la medida, podrá exigir que el actor preste caución real o personal y además limitar su vigencia temporal; 7) el Juez podrá ordenar su sustanciación previa si lo considera pertinente, por lo que quedará a su criterio si abre o no una instancia bilateral; 8) a su vez advertimos que si bien no se exige verosimilitud del derecho si probabilidad fuerte del derecho pretensor (más que una mera apariencia); 9) decretada tal medida no les serán aplicables las disposiciones relativas a la caducidad de pleno derecho previstas para las medidas cautelares; 10) esta medida origina un proceso autónomo que se agota en sí mismo que no requiere la promoción de otro posterior y a través de este “proceso” se puede obtener la satisfacción plena de la pretensión, con respecto a esto último calificada doctrina sostiene que este fenómeno no puede denominarse proceso atento a que en el despacho de la medida solo intervienen el actor y el juez, por lo tanto no hay bilateralidad y 11) por último, el legislador instrumentó un procedimiento facultativo para el impugnante: el que podrá pedir la suspensión de la medida, interponer recurso de revocatoria (3 días), o apelación directa o en forma subsidiaria con efecto devolutivo o por bien promover un proceso de conocimiento.

Posiciones a favor y en contra de las medidas autosatisfactivas:

El pensamiento procesal civil nacional se encuentra bifurcado entre dos corrientes de signos diversos y hasta diríamos que antagónicos, a los que se ha dado en llamar “activismo judicial” y “garantismo procesal”. Sabido es que los códigos de procedimientos civiles más recientes, depositan en manos de los jueces civiles un amplio número de facultades-deberes para mejor cumplir su cometido de distribuir el pan de la Justicia⁵.

Las medidas autosatisfactivas, la llamada tutela anticipatoria, la medida cautelar innovativa, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, entre otros tantos, son consecuencia de un activismo judicial que es creativo y ha aportado numerosos nuevos institutos procesales. Este tipo de creaciones ha venido a reforzar – por vía pretoriana, aunque muchas de ellas ya tienen sanción legislativa – el cúmulo de potestades de los tribunales civiles nativos⁶.

El activismo judicial se preocupa ante todo por la justa solución del caso y no tanto por no contradecir o erosionar el sistema procesal respectivo. Es así como la prohibición de innovar, la medida innovativa, la prueba de informas, el amparo, etc., tuvieron aplicación judicial con mucha anterioridad a que recibieran la impronta de lo legal⁷.

procesales”, Santa Fe, 2003, Panamericana, p. 155 y ss.

⁴ Riol, María, “La cosa juzgada en relación a las medidas autosatisfactivas”, en “Medidas Autosatisfactivas”, p. 362.

⁵ Peyrano, Jorge W., *Sobre el activismo judicial*, La Ley 26/02/2008, 1 – LA LEY 2008-B, 837, AR/DOC/282/2008.

⁶ Peyrano, Jorge W., *Sobre el activismo... Ob. Cit.*

⁷ Peyrano, Jorge W., *Sobre el activismo... Ob. Cit.*

En el panorama doctrinario procesal contemporáneo prevalece el activismo judicial, por lo que podría afirmarse en ese sentido, que el CPCCLP sería un código procesal moderno y acorde a las nuevas tendencias. A su vez cabe señalar que el Código Civil y Comercial, permite vislumbrar entre sus normas un mayor protagonismo del Juez en la resolución de los conflictos, por lo que este tipo de ordenamientos procesales, inspirados en un activismo judicial, parecieran ser los que más se corresponderían con la nueva normativa de fondo.

Entre los aspectos positivos que se resaltan del activismo judicial, puede destacarse aquél que sostiene que se trata de una doctrina que posibilita en mayor medida que otras, la consagración de un “Derecho Procesal de excepción”, es decir un ramillete de instrumentos que valora muy especialmente las circunstancias del caso (o sea el ajuste de la decisión judicial a las particularidades de la causa) que revelan que está frente a un supuesto excepcional que no puede ser objeto de los parámetros corrientes⁸.

En esta misma línea, Fazzolari sostiene que: “habitualmente cuando se habla de reformar el proceso civil porque es muy lento e ineficiente ¿Qué se hace?: se propone juicio oral o estructuras del proceso más cortas, términos abreviados, pero son soluciones relativas porque siempre está presente el hueco de las chicanas, para la presentación de recursos, toda esa maniobra que hace que el proceso se alargue”. En fin, para este sector una manera de alcanzar que el proceso sea más eficiente está en la solución de la urgencia, la medida cautelar enérgica como la medida innovativa, la tutela anticipatoria.

Críticas en contra:

Están quienes se resisten a este tipo de reformulación del proceso cautelar proclamando y salvaguardando el debido proceso como un principio que se ubica por encima de las reglas simplemente procedimentales. Así manifiestan que cada vez que se dicte una medida autosatisfactiva se tutelaría el derecho incierto del actor con absoluto desmérito del derecho del demandado, soslayando la inviolabilidad de la defensa en juicio. Por otra parte, agregan con convicción de que no hay nada de cautelar en este tipo de medidas sino bien, por el contrario, anticipa el contenido de una sentencia declarativa o de condena que, además, en algunos casos no llega a dictarse jamás. Entre otros aspectos, sostienen que esto implicaría dotar de mayores poderes a los jueces.

Conclusión:

Consideramos que resultaría apropiada la incorporación de las medidas autosatisfactivas al código procesal de la provincia, debiendo establecerse las reglas claras a las que deberá ajustarse la aplicación y procedencia de este instituto procesal, considerando oportuno que el Juez deba disponer -aún en forma comprimida- una sustanciación a la parte accionada, a fin de no resultar vulnerado el derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 CN.

Audiencia Preliminar: (Art. 343 y cctes.)-

Art. 343.- AUDIENCIA PRELIMINAR.- Si hubiere hechos controvertidos el juez señalará una audiencia a realizarse dentro de los quince (15) días de dictada la providencia que tiene por contestada la demanda o reconvencción, en su caso, o firme el interlocutorio que resuelve las excepciones previas.

Dentro de los cinco (5) días de notificada, las partes deberán ofrecer las pruebas de que intenten valerse. Si no lo hicieren se producirá la caducidad de ese derecho, salvo respecto de la documental ya acompañada, o que se encuentre en poder de la otra parte o de terceros, o de la que ya hubiere sido ofrecida.

Comentario:

En términos generales, esta audiencia tiene por objeto simplificar el

⁸ Peyrano, Jorge W., *Sobre el activismo... Ob. Cit.*

procedimiento procurando arribar a una temprana solución de los conflictos mediante un acuerdo entre las partes, ahorrando tiempo y recursos en la sustanciación de los procesos.

A diferencia de lo establecido por el artículo 299 del CPCCT según el cual "Siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, *el juez recibirá la causa a prueba*", el presente artículo prevé que ante la existencia de hechos controvertidos, *el juez señalará una audiencia* a realizarse dentro de los quince (15) días de dictada la providencia que tiene por contestada la demanda o reconvenición, en su caso, o firme el interlocutorio que resuelve las excepciones previas.

Cabe destacar que para la procedencia de la audiencia preliminar, según el CPCCLP, basta la existencia de hechos controvertidos, es decir, tratarse de hechos sobre los cuales no hay conformidad entre las partes y que ameriten la apertura a prueba del proceso.

Conforme surge del digesto procesal en análisis, durante el desarrollo de la audiencia el juez podrá fijar los *hechos conducentes*, es decir, aquellos relevantes para la decisión de la causa traída a su consideración.

En nuestra opinión no caben dudas que lo que este tipo de audiencias busca en el marco de un proceso de conocimiento, es posibilitar una mayor intermediación del Juez con el conflicto traído a su consideración, a fin de que el mismo pueda interceder en miras a acercar a las partes, en la medida de lo posible, a una solución conciliadora del conflicto.

Art. 344. - REGLAS. La audiencia preliminar se realizará según las siguientes reglas:

1. Será presidida por el juez bajo pena de nulidad, la que no podrá ser convalidada y podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado o instancia del proceso. Las explicaciones o aclaraciones que requiera o las fórmulas conciliatorias que proponga, no constituirán prejuzgamiento.

2. Las partes deberán concurrir en forma personal y por medio de sus representantes legales en caso de menores o incapaces, con asistencia letrada, quedando notificadas de todo lo que aconteciera en el acto. En casos extremos el juez, por resolución fundada, podrá autorizar a la parte a comparecer por representante. Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, alguna de las partes no pudiere comparecer, el Tribunal podrá diferir la audiencia.

La parte que no concurriera a la audiencia quedará también notificada en el acto de todas las resoluciones que allí se dicten, no pudiendo plantear, ninguna cuestión o recurso al respecto, y su ausencia injustificada podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos proporcionados por la contraparte.

3. Cuando alguna de las partes sea una persona jurídica, deberá indicar, con anterioridad a la audiencia, quién la representará en el acto. La persona designada deberá conocer acabadamente el objeto del juicio y se la tendrá por notificada con la presentación del escrito. En caso de no efectuarse la indicación prevista por este artículo, deberá concurrir a la audiencia la persona que legalmente represente a la parte.

Comentario:

En primer lugar, debemos destacar que el artículo comentado requiere la intervención obligada del juez en la audiencia preliminar, bajo pena de nulidad. También las partes deben comparecer personalmente -y por medio de representantes legales en caso de menores o incapaces- además de asistir con un letrado. Sólo en casos excepcionales el juez puede autorizar que la audiencia se celebre con los representantes de las partes.

La falta de asistencia debidamente justificada trae aparejada las siguientes

consecuencias:

- a) la notificación *ministerio legis* de todos los planteos y resoluciones que se toman durante su celebración;
- b) la preclusión para plantear cuestión o recurso al respecto;
- c) el reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos proporcionados por la contraparte.

Art. 345. - DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR. En el curso de la audiencia preliminar el juez:

1. Podrá requerir explicaciones o aclaraciones a las partes o a sus letrados y apoderados indistintamente, acerca de los hechos y pretensiones articulados en sus respectivos escritos tratando de eliminar la oscuridad o ambigüedad que contengan.

2. Deberá intentar la conciliación de las partes en forma total o parcial. A tal fin las instará a que formulen propuestas de arreglo y, si no lo hicieren, podrá proponerle una o más fórmulas conciliatorias. En caso de conciliación total o parcial, el juez la homologará en el acto, salvo en los casos que existan menores e incapaces interesados y deba requerir el dictamen previo.

3. Resolverá cualquier cuestión previa que se encontrare pendiente o pudiere presentarse, expidiéndose también sobre los hechos nuevos denunciados conforme al art. 348.

4. Dejará establecidos los hechos pertinentes acerca de los cuales no exista controversia entre las partes, procurando, a tal fin, eliminar las discrepancias que existan. Fijará asimismo, según las pautas del art. 347, los hechos conducentes que deban ser objeto de la prueba.

5. Abrirá la causa a prueba por un plazo no mayor a los cuarenta (40) días, salvo que se diera la situación prevista en el art. 352, ordenando la producción de la ofrecida por las partes que sean conducentes, pudiendo decretar otras de oficio que estime pertinentes. Para decidir cuáles serán las pruebas que mandará a producir, el juez aplicará los principios establecidos en el art. 347.

Si alguna de las partes se opusiere a la apertura a prueba, la cuestión se resolverá en el mismo acto, previa sustanciación. Sólo será apelable la resolución que deniegue la apertura a prueba. En su caso, el recurso deberá interponerse y fundarse en el acto, debiendo en la misma oportunidad, responder la parte apelada. Cumplido se elevará sin más trámite a la Cámara de Apelaciones.

6. Antes de la audiencia, las partes, de común acuerdo podrán presentar un escrito proponiendo peritos y determinando los puntos de la pericia.

7. En caso que no hubiera habido acuerdo de parte, ofrecida prueba pericial, de ella y de los puntos propuestos correrá traslado a la contraparte que deberá contestar en la misma audiencia. De admitirse su producción fijará los puntos de pericia designándose el perito en el acto conforme al art. 437 párr. 1.

8. Si como resultado del tratamiento de los incisos anteriores no hubiera prueba pendiente a producir, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el párr. 2 del art. 342, salvo que las partes consientan alegar en el mismo acto en cuyo caso se concederán a cada una un traslado por su orden de quince (15) minutos.

9. Podrá disponer una nueva audiencia a realizarse en su presencia para recibir la prueba testimonial, las declaraciones de las partes y las explicaciones que se requieran a los peritos.

Comentario:

El artículo establece una participación proactiva del juez durante la audiencia, organizando el proceso, orientando el debate y proponiendo alternativas de solución del conflicto ante la falta de iniciativa de las partes.

Es preciso remarcar también que a más de procurar una composición de los intereses en juego, aún cuando no pudiere arribarse a una conciliación, la

audiencia contribuye a circunscribir o delimitar el objeto del debate. Ello así en tanto el juez puede pedir en esta oportunidad explicaciones y aclaraciones a las partes respecto de los hechos invocados y sus pretensiones, resolver toda cuestión pendiente o que pudiere presentarse, establecer los hechos pertinentes acerca de los cuales no exista controversia entre las partes, eliminar las discrepancias que existan y fijar los hechos conducentes que deban ser objeto de la prueba.

En caso de llegar a una conciliación, el juez procederá a homologar con fuerza de ley el acuerdo arribado por las partes.

En cuanto a la producción de la prueba, el precepto normativo en análisis prevé *un plazo no mayor a cuarenta (40) días*, pareciendo dejar librado a la prudencia del juez la fijación del mismo. Se contempla el plazo extraordinario de prueba. Además de ordenar la producción de aquellas pruebas ofrecidas por las partes que resulten conducentes, el juez se encuentra facultado para disponer otros medios probatorios que considere pertinentes. *Sólo será apelable la resolución que deniega la apertura a pruebas*, es decir, que si alguna de las partes se opone a la apertura a pruebas de la causa, y ésta fuera dejada sin efecto, la resolución que así lo dispone será apelable.

No existiendo más pruebas para producir, se abren dos posibilidades: a) si la cuestión fuere de puro derecho los autos se reservan en Secretaría por cinco (5) días comunes en los que las partes pueden ampliar los fundamentos de sus pretensiones o defensas (párr. 2° del art. 342); b) salvo que las mismas consientan alegar en el mismo acto en cuyo caso se concederán a cada una un traslado por su orden de quince (15) minutos.

Conclusión acerca de la posibilidad de incorporación de la Audiencia Preliminar en el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán:

Consideramos, en principio, que podría resultar positiva la inclusión de este tipo de audiencias preliminares en el ordenamiento procesal de nuestra provincia, ello pese al tiempo que su celebración podría insumir en la labor diaria de un juzgado, ya que podría constituir una herramienta procesal idónea para contribuir a resolver gran cantidad de asuntos con mayor celeridad.

La presencia de la audiencia preliminar dentro del marco del proceso ordinario regulado en el CPCCLP, pone en evidencia la intención del mencionado digesto provincial, de atribuirle al Juez un rol proactivo dentro del proceso judicial, en aras a potenciar las posibilidades de que las partes en conflicto arriben a un acuerdo, contribuyendo de esta manera a descongestionar en la medida de lo posible el volumen de causas que tramitan ante la Justicia.

No obstante las virtudes que puedan encontrarse en este tipo de institutos procesales, y los valorables objetivos que su consagración normativa pretenda alcanzar, es dable poner de manifiesto que la conveniencia de la incorporación de la audiencia preliminar en el proceso ordinario regulado en el CPCCT, dependerá en gran medida de la infraestructura con la que cuenten los juzgados de nuestra provincia, como también de los recursos humanos necesarios para poder tornar operativa este tipo de normas procesales en nuestro medio.

Consideramos que el éxito de la reforma de los procesos civiles y comerciales en nuestra provincia va a depender, no tan sólo de la sanción de un Código Procesal con normas e institutos procesales innovadores, sino exclusivamente de los recursos económicos, humanos y de infraestructura que el Estado ponga a disposición de los operadores jurídicos, a fin de que las normativas procesales puedan aplicarse efectivamente en los procesos judiciales.

Carga dinámica de la Prueba: (Art. 360).-

Art. 360.- CARGA DE LA PRUEBA.- Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un proceso jurídico que el juez o el tribunal no tengan el deber de conocer.

Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento.

La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del tribunal ni a la apreciación de las omisiones, deficiencias de la prueba o ausencia de la colaboración debida, conforme al Art.368.

Sin perjuicio de ello, tendrá la carga de probar los hechos, aquel que por las circunstancias del caso, se encuentre en mejores condiciones de arrimar a conocimiento del tribunal, el esclarecimiento de los mismos.

Comentario:

Consideramos que sería importante la incorporación entre las normas procesales del CPCCT la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, las cuales se encuentran receptadas en el CPCCLP en el último párrafo del art. 360.

Esta doctrina hace recaer la carga de probar determinados hechos sobre quien esta en mejores condiciones fácticas de hacerlo, encontrándose la contraparte ante una imposibilidad o extrema dificultad de acompañar dicho material probatorio.

La circunstancia de estar en mejores condiciones de producir pruebas significa que la parte a quien se le atribuye la carga probatoria reviste una posición privilegiada con relación al objeto de prueba, la aplicación de la regla de las cargas probatorias dinámicas presupone una situación de desigualdad en lo que respecta a las posibilidades probatorias, la cual debe ser trascendente.

La aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas no implica que la parte del proceso que se encuentra en inferioridad de condiciones no deba probar, sino que deberá acreditar su imposibilidad de producir la prueba.

Autorizada doctrina repara en que las cargas probatorias dinámicas encierran una flexibilización de las reglas ortodoxas de distribución de la carga probatoria; aceptando así la validez de apartamientos excepcionales de las susodichas reglas clásicas que diseñara Chiovenda y que luego fueron mejoradas por Rosenberg⁹.

Asimismo, resulta importante traer a consideración lo afirmado por Berizonce, quien sostiene que las reglas procesales estampadas en el Código no pueden ser leídas en clave de su sola y dogmática textualidad, sino, antes bien, en función de tales valores y principios, que se resumen y compendian en los contenidos, antes referidos, de la tutela judicial efectiva. El juez no se limita ya, simplemente, a actuar la voluntad de la ley, sino que su misión en la interpretación y aplicación de la normativa procesal reside más bien en tornar efectiva la tutela jurisdiccional de los derechos, en el marco, naturalmente, de la observancia de las garantías del proceso —contradictorio, publicidad, fundamentación suficiente del decisorio, razonabilidad, consistencia¹⁰.

Cabe manifestar que el Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente entrado en vigencia, consagra la doctrina de las cargas probatorias dinámicas en dos preceptos normativos, los arts. 710¹¹ y 1735¹², el primero de ellos se encuentra emplazado en el ámbito del Derecho de Familia, mientras que el segundo de ellos está ubicado en el terreno de la regulación de la responsabilidad civil.

Al analizar esta cuestión particular, autorizada doctrina ha señalado que todo el Código Civil y Comercial constituye una muestra de fe en el activismo judicial y en la capacidad de los jueces para encontrar soluciones razonables, y así ponderar los valores en juego y no limitarse a subsumir automáticamente los

⁹ Peyrano, Jorge W., “Las cargas probatorias dinámicas, hoy”, RCCyC 2016 (marzo) , 15, La Ley, AR/DOC/583/2016.-

¹⁰ Berizonce, Roberto, “El principio de legalidad bajo el prisma constitucional”, LA LEY del 5/10/2011. Cita en: Peyrano, Jorge W., “Las cargas probatorias..Ob. Cit”.

¹¹ Art. 710 CCyC: “Principios relativos a la prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar”.

¹² Art. 1735 CCyC: “Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa”.

hechos litigiosos en normas legales infraconstitucionales. Ponderar es también aceptar lo diferente y tenerlo en cuenta, y así no aplicar ciegamente reglas de reparto probatorio pensadas para casos corrientes y no para hipótesis excepcionales de gran dificultad probatoria para la parte sobre la que, en principio, recaería la carga de la prueba¹³.

Cabe aclarar que el desplazamiento probatorio es inaplicable cuando la prueba es posible de producir por quien alega el hecho. La circunstancia de que el demandado pueda probarlo con mayor facilidad no exime al actor de la prueba. Si no hay auténtica inferioridad, algunos inconvenientes insuperables para el pretensor no lo alivian de la carga probatoria, sólo porque a la otra parte le resulte más sencillo demostrar los extremos debatidos¹⁴.

El CPCCLP con esta norma procesal pone de manifiesto que se inclina por un activismo judicial, y consideramos que el CPCCT debería incorporar una norma en la que se establezca la vigencia de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas en los procesos civiles ordinarios. Ello no tan sólo por las normas de fondo del CCyC que para determinados procesos establecen la vigencia de dicha doctrina, sino que también en virtud de lo establecido en algunas leyes especiales como es el caso de la Ley nº 24.240 de Defensa del Consumidor, que en el tercer párrafo de su art. 53 establece: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio”.

Lo manifestado *ut supra* pone de manifiesto la importancia de que nuestro código de rito provincial se adecúe a las nuevas corrientes, y cuente con una norma procesal que consagre esta novedosa técnica de distribución de la carga probatoria.

III.- Procesos de Estructura Monitoria: Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa Libro III (Arts. 463 a 470).-

Proceso Monitorio:

El proceso monitorio es una institución procesal desarrollada desde hace varios siglos en el continente europeo, “La fuente indudable del proceso monitorio nació en el Siglo XIII, con el procedimiento denominado el *preceptum o mandatum de solvendo cum clausula iustificativa*, según la doctrina más adelante destacada”. Aunque hay evidencias de su existencia en el derecho Longombardo, con el propósito de simplificar el “*solemnis ordo indicarius*” proceso ordinario largo y dispendioso que se utilizaba el cobro de créditos exigibles que no estaban representados en documento, como lo expresa Calamandrei: “Para ciertos créditos, aunque no resultasen de documentos, se estableció en nuestro derecho medieval el uso de no citar en juicio al deudor, sino de obtener directamente del juez la orden de la prestación que abría la ejecución, es decir, el *mandatum o praeceptum de solvendo*”¹⁵.

El proceso monitorio consiste en una estructura, en un modo de ser del proceso, caracterizado porque presentada la demanda (si ella cumple con los requisitos que, según los casos, prescribe la ley) el juez inaudita altera parte dicta una resolución favorable a aquélla, condicionada a que el demandado, citado en forma, no se oponga dentro del plazo que a tales efectos se le asigna¹⁶.

Normalmente la actividad jurisdiccional se divide en dos momentos: la cognición (para la declaración del derecho) y la ejecución forzada (para la realización del interés insatisfecho -como consecuencia de la falta de cumplimiento por el obligado a la condena impuesta-). El proceso de ejecución,

¹³ Peyrano, Jorge W., “Las cargas probatorias...Ob. Cit”.

¹⁴ Zavala de González, Matilde – González Zavala, Rodolfo, “Las cargas dinámicas en el nuevo Código Civil”, Semanario Jurídico, nro. 1995, del 12/3/2015.

¹⁵ Calamandrei, P., 1973, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, traducción de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.

¹⁶ Martínez, Oscar José y Viera, Luis A.: “El Proceso Monitorio (Base para su legislación uniforme en Iberoamérica)”, en Revista JUS, La Plata, 1990, año 41, pág. 51 y ss.

entonces, se presenta como una continuación del proceso de conocimiento y etapa final de la actividad encaminada a la realización del derecho. El proceso de cognición no cumple sino una función meramente preparatoria o instrumental de acordar al acreedor un título para la ejecución. Atendiendo a tal situación, y como una forma de alcanzar una mayor celeridad en la solución de determinados asuntos, y evitar la tramitación previa del proceso de conocimiento, se ha elaborado una estructura particular que se ha dado en llamar proceso monitorio, y así, se ha establecido que, frente a la sola demanda del actor, y sin previo contradictorio, el tribunal dicte, en primer lugar, la sentencia monitoria por la que ordena al demandado el cumplimiento de una prestación; y luego, en un segundo momento, le brinda a este último la posibilidad de manifestar su oposición, con las variantes que la misma presenta según la clase de proceso monitorio a que se refiere¹⁷.

En el proceso monitorio se invierten los momentos de la discusión y de la resolución: el juez, frente a la demanda del actor, dicta en primer lugar y sin previa contradicción la sentencia monitoria ordenando al demandado el cumplimiento de una determinada prestación. Y luego, en una etapa ulterior, concede al demandado la oportunidad para que formule su oposición, fijándole un plazo a tales efectos. Es decir, se desplaza la iniciativa del contradictorio al demandado, en cuanto debe este último formular la oposición para enervar los efectos de la sentencia monitoria favorable al accionante. Como señala Calamandrei, el carácter típico de esta categoría de proceso, cuya estructura puede variar en los detalles de una legislación a otra, es "que en ellos la finalidad de llegar con celeridad a la creación del título ejecutivo se alcanza desplazando la iniciativa del contradictorio del actor al demandado".

Se pueden distinguir las siguientes clases de procesos monitorios: 1) El proceso monitorio puro es aquél en el que, para que el tribunal dicte la sentencia con la orden al demandado para el cumplimiento de una prestación, no se requiere acompañar probanza alguna, sino que se realiza frente a la sola afirmación no probada del acreedor. Emitida la sentencia que contiene la orden, se le otorga al demandado un plazo para que formule su oposición. Esa orden pierde eficacia por la simple oposición oportuna del deudor -que no necesita ser motivada-, supuesto en que el asunto sólo podrá sustanciarse a través del proceso de conocimiento respectivo, y el monitorio ha pasado a ser una forma especial de iniciación del proceso. En el proceso monitorio puro, entonces, no hay pruebas, ni del actor para formular su demanda, ni del demandado para sostener su oposición. 2) El proceso monitorio documental, el juez sólo despacha la orden de cumplimiento si los hechos alegados por el actor son probados por medio de documentos auténticos acompañados a su demanda. En este caso, la oposición del deudor debe ser fundada en los hechos y el derecho, y tiene por efecto abrir una etapa de cognición para determinar si las defensas opuestas por el deudor demuestran la falta de fundamento del mandato, o si, por el contrario, éste debe ser mantenido y hecho ejecutorio. En el proceso monitorio documental, entonces, el actor tiene que aportar pruebas que avalen su pretensión; y el demandado tiene la carga de probar los hechos en que fundamenta su oposición.

La garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, encuentra aplicación en el denominado principio de contradicción (también denominado de controversia o de bilateralidad de la audiencia). Este principio establece que de toda petición o planteo de parte debe correrse traslado a la otra u otras partes a quienes puede afectar la decisión solicitada; es decir, el tribunal no puede dictar sentencia sin haber escuchado a las partes a quienes puede alcanzar la misma.. Lo que exige este principio es que se dé al interesado la posibilidad razonable de defenderse, pero no requiere la efectividad de su ejercicio. Normalmente el contradictorio tiene lugar con anterioridad al dictado de la sentencia respectiva: se llega a la resolución judicial luego de agotar una discusión entre los contendientes; es decir, observando los principios que rigen a la dialéctica (o dialógica) que obligan al planteamiento de una tesis (demanda) a la que se contesta con una antítesis (responde), y luego del estadio probatorio se

¹⁷ Loutafy Ranea, Roberto; "Proceso Monitorio" Publicado en Morello, Augusto M.; Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O: "Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Bs. As. - Abeledo-Perrot-, La Plata -Librería Editora Platense-, t. X-a (Actualización. Parte General), 2004, pág. 495.

llega a la síntesis (sentencia). Sin embargo, hay supuestos en que se permite el desplazamiento de la oportunidad de su efectivización, como ocurre en las medidas cautelares, las que se decretan inaudita parte, pero se difiere la eventualidad de la controversia al momento inmediato posterior al perfeccionamiento de la misma. Y lo mismo ocurre en el proceso ejecutivo o en el proceso monitorio en general, en que la orden judicial se da antes de haber escuchado al demandado, pero se invierte la iniciativa de la controversia, al ser el demandado quien debe cuestionar la resolución que contiene la orden judicial¹⁸.

En definitiva, las características de los procesos de estructura monitoria son:

1. La corta participación del órgano jurisdiccional que se reduce al control de la documentación y al dictado de la sentencia monitoria.

2. La ausencia del contradictorio previo a la decisión del juez

3. La técnica "*Secundum eventum contradictionis*", esto es, el silencio es considerado como reconocimiento o como confesión.

4. Frente a la ausencia de oposición la orden del juez adquiere valor de cosa juzgada.

5. La oposición en término por parte del demandado vuelve ineficaz la decisión del juez transformando la naturaleza del proceso a uno declarativo.

En el proceso monitorio documental podemos distinguir las siguientes etapas:

A) FASE NECESARIA O DE RESOLUCION:

- DEMANDA
- SENTENCIA MONITORIA
- NOTIFICACION

B) FASE EVENTUAL O DE COGNICION:

- OPOSICION
- TRAMITE DE LA OPOSICION
- SENTENCIA CONFIRMATORIA O REVOCATORIA
- RECURSOS

El nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa, sancionado por ley 1.828 y que entró en vigencia el día 01/04/2001, entre sus novedades incorporó en el Libro III los llamados procesos de "estructura monitoria", procesos que ninguna identificación tiene con los procesos de ejecución, regulados en partir del Libro IV del mismo código. La idea del legislador al introducir este tipo de procesos, fue procurar mejorar la administración de justicia, siempre criticada por su extremada lentitud, proponiendo solucionar determinados conflictos judiciales de forma rápida, con la mayor celeridad posible, de modo que el acreedor, en casos sencillos y cuyo derecho surja de un título de un modo claro y en apariencia prácticamente indiscutible por el eventual contradictor, obtiene desde el inicio una sentencia favorable que se expide sobre el fondo de la cuestión, y no deba tener que soportar todo el trámite de un proceso

¹⁸ Lautayf Ranea, *Ob. Cit.*

judicial convencional, para recién obtener el reconocimiento del derecho que reclama.-

El procedimiento de "estructura monitoria" resulta aplicable a las controversias previstas en el art. 463 del Cód. Procesal que versen sobre:

a) obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios o de dar cosas muebles ciertas y determinadas;

b) división de condominio;

c) restitución de la cosa inmueble dada en comodato;

d) desalojo de bienes inmuebles urbanos y rurales por vencimiento del plazo contractual;

e) desalojo de bienes inmuebles urbanos y rurales por falta de pago, siempre que se hubiere justificado por medio fehaciente la interpelación al locatario que establecen las leyes vigentes;

f) obligación de otorgar escritura pública y transferencia de automotores;

g) cancelación de prenda o hipoteca;

h) los procesos de ejecución, en los casos autorizados por este código u otras leyes., con excepción de la ejecución de sentencia.

El proceso de estructura monitoria está reservado a los casos en que el demandante presente un "instrumento público o instrumento privado reconocido judicialmente o cuya firma estuviere certificada por escribano público, de cuyo contenido surja el derecho en que se funda la acción" (art. 464, C. Pr.). La "prueba", más bien el "título" que da derecho a este particular proceso (art. 465), ya tiene que estar incorporado desde un principio, para que pueda dictarse la sentencia monitoria. Corresponde afirmar que la presentación del título en los términos del art. 464 del Cód. Procesal resulta ser un requisito esencial e ineludible, un requisito que hace a la admisibilidad de la pretensión, para el actor que pretende acceder al proceso monitorio, puesto que merced a ese título obtendrá una sentencia monitoria conforme la pretensión deducida, es decir una sentencia dictada "inaudita parte" que se expide sobre el fondo del asunto.

Promovido el proceso monitorio y presentado el título con los requisitos exigidos por el art. 464 de la ley ritual, el juez debe limitarse a examinar cuidadosamente si el título cumple con los recaudos legales, y en tal sentido debe ser sumamente restrictivo, y si los cumple, dictará la sentencia monitoria conforme a la pretensión deducida (art. 465, Cód. Procesal).

El art. 466 CPCCLP exige que la sentencia monitoria se notifique al demandado en su domicilio real, "agregándose copia de la demanda y documental acompañada". La "documental" no puede ser cualquiera, sino aquella que justifique la promoción de un proceso monitorio, la requerida por el art. 464. De otro modo, es fácil concluir, el demandado no está en condiciones de ejercer en plenitud su defensa.

El demandado puede oponerse en un plazo determinado, generándose el clásico procedimiento dialéctico, manteniéndose o no la primera resolución. La falta de oposición hace que aquella adquiera la calidad de cosa juzgada. En consecuencia, la decisión inicial constituye una verdadera sentencia definitiva condicionada a su impugnación en término perentorio¹⁹.

En caso de oposición, la continuación del trámite se regirá por las normas que este el digesto procesal específicamente prevé en cada supuesto, abriéndose de esa manera un proceso de cognición que culminará con el dictado de una sentencia que será confirmatoria o revocatoria de la monitoria.

¹⁹ Cfr. Teitelbaum Jaime: "Proceso monitorio y ejecutivo", en Curso sobre el CGP, Tomo II, p. 129; Montevideo, 1992; citado por Falcón Enrique en: "Tratado de Derecho Procesal...", Tomo V, p. 165; edit. Rubinzal Culzoni, 2006

Conclusiones generales:

A modo de conclusión general del presente trabajo, consideramos importante poner de manifiesto que el objetivo fue analizar las cuestiones procesales más novedosas reguladas en el articulado del CPCCLP.

Se pretendió brindar un enfoque no tan sólo teórico respecto de los institutos procesales analizados, sino más bien práctico, resaltándose en algunos casos la conveniencia de incorporar ciertos institutos procesales nuevos a la normativa procesal de la provincia de Tucumán, mientras que respecto de otras cuestiones, como por ejemplo la audiencia preliminar, optamos por manifestar que su aplicabilidad en los procesos ordinarios que se sustancian en la justicia provincial, va a depender exclusivamente de un cambio en cuanto a la infraestructura y recursos humanos con los que cuentan los juzgados, que torne factible la incorporación de este tipo de normas procesales, evitando así el dictado de disposiciones que resulten de imposible aplicación en la realidad práctica.

Finalmente entendemos importante mencionar que un cambio normativo no basta para implementar un proceso de reforma, ello debe necesariamente ir acompañado de modificación de organizaciones, de capacitación de todos los operadores sobre oralidad en cuestiones no penales, como esencialmente, de un nuevo paradigma cultural para lograr incorporar nuevas prácticas judiciales